



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

#### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL  
DEMANDANTE: MARGARITA MARIA FERNÁNDEZ TOBÓN  
DEMANDADO: COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.  
RADICADO: 050013105 – 016-2020-00244-01  
ACTA N°: 06

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **MARGARITA MARÍA FERNÁNDEZ TOBÓN** para pronunciarse en virtud de recurso de apelación interpuestos por **PROTECCIÓN S.A** así como en el grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 06** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. LA DEMANDA<sup>1</sup>

La DEMANDANTE pretende con este proceso básicamente lo siguiente: i) Que se **DECLARE** la **INEFICACIA y/o NULIDAD** de su traslado y la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A. ii) Que se **ORDENE** a PROTECCIÓN S.A el traslado de todo el dinero que se encuentra depositado en la cuenta de ahorro individual de la actora, como cotizaciones, bonos pensionales o sumas adicionales de la aseguradora, así como con los rendimientos a COLPENSIONES. iii) Que se **ORDENE** a COLPENSIONES recibir los aportes y autorice el regreso sin solución de continuidad.

En sustento de sus pedimentos afirmó básicamente lo siguiente: **i)** La demandante nació el 21 de marzo de 1961. Se encontraba afiliada al I.S.S. hoy COLPENSIONES para riesgos de IVM entidad en la que aportó 184.14 semanas. El 1 de mayo de 2003 diligenció formulario de afiliación a PROTECCIÓN, trasladándose así al RAIS. **ii)** Los asesores o

---

<sup>1</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/01.Demandadigitalizada. Pág. 1-3

promotores del fondo privado en ningún momento le suministraron la información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta para su traslado a la actora. Tampoco le informaron el saldo que debía acreditar en la cuenta de ahorro individual para obtener una pensión anticipada; y menos le hicieron un estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas que le aparejaría permanecer o trasladarse de régimen; incumpliendo así el deber de diligencia que le impone su responsabilidad profesional, e induciendo en error o engaño a la actora. **iii)** Para el momento de la presentación de la demanda cuenta con 58 años de edad, con un IBC de \$2.700.000 y 1057semanas cotizadas y a pesar de ello el fondo le manifiesta que solo tendría derecho a una devolución de saldos sin derecho a la pensión de vejez. El valor de la mesada pensional en COLPENSIONES sería de \$1.965.373 con el promedio de los últimos 10 años, lo que evidencia el vicio en el traslado.

## 2. CONTESTACIONES

### 2.1. PROTECCIÓN<sup>2</sup>

La entidad se **opuso a la totalidad de las pretensiones**, en especial a que se declare la ineficacia del traslado, toda vez que se encuentran frente a un acto existente, válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Que del formulario de vinculación que suscribió la demandante se observa que tal acto se realizó de forma libre y voluntaria, solemnizándose de esta forma la afiliación, acto que tiene la naturaleza de un verdadero contrato entre las partes.

Propuso como excepciones las que denominó: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE RESTITUCIÓN MUTUA EN FAVOR DE LA AFP: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA PRIMERA PREVISIONAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y PORQUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE, INNOMINADA O GENÉRICA.

### 2.2. COLPENSIONES<sup>3</sup>

La administradora del Régimen de Prima Media entidad se **opuso a la declarativa y condena de las pretensiones formuladas** por carecer de fundamentación fáctica y legal. Propuso como excepciones las que denominó: INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES DE MORA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993, LA INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES, RESPONSABILIDAD SUI GENERIS DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PRETENDIDAS, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN.

<sup>2</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/05Contestaciondeproteccion17-06-2021. Pág. 1-24

<sup>3</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/07CorreoContestaciónColpensiones. Pág. 1-9

### 3. SENTENCIA<sup>4</sup>

En la audiencia del **19 de septiembre de 2019** el **JUEZ DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** tomó las siguientes decisiones: **i) DECLARÓ** la INEFICACIA de la afiliación de MARGARITA MARIA FERNANDEZ TOBON a PROTECCION S.A. realizada el 3 de septiembre de 2002. En consecuencia, **DECLARÓ** que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. **ii) ORDENÓ** a PROTECCIÓN el traslado a COLPENSIONES y a esta a recibir los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos los rendimientos financieros y los saldos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. **iii) ORDENÓ** a PROTECCION S.A. devolver al Régimen de Prima Media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora **MARGARITA MARÍA FERNÁNDEZ TOBÓN**, incluyendo todo el dinero recibido por la afiliación, las cotizaciones de forma completa, los bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos administrativos ni los aportes de solidaridad ni ningún concepto, pues se considera que en ningún momento debió producir ningún efecto jurídico dicho traslado. Esta erogación deberá realizarla con cargo a sus propios recursos. Para el cumplimiento de ésta obligación se concede un término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia. **iv) ORDENÓ** a COLPENSIONES reactivar la afiliación al Régimen de Prima Media con prestación definida a la señora **MARGARITA MARÍA FERNÁNDEZ TOBÓN** y recibir todos los dineros que sean trasladados por PROTECCION S.A. Autorizó a COLPENSIONES realizar un cálculo de equivalencia de los dineros recibidos desde el Régimen de Ahorro Individual, de forma tal que no le genere perjuicio alguno recibir al demandante al momento de cumplir con las obligaciones pensionales a su cargo. **v) CONDENÓ** en costas a PROTECCION S.A.

### 4. RECURSOS DE APELACION DE PROTECCIÓN S.A.<sup>5</sup>

Se solicita la revocatoria de la sentencia, señalando lo siguiente: **i)** Invoca la sentencia SL812 de 2022 solicitando su aplicación en virtud de la prueba documental allegada respecto a las proyecciones pensionales presentadas al momento de la afiliación, en las que informa que el valor de la pensión en el Régimen de Ahorro Individual era para esa época en el año 2002 de \$112.441 y en el Régimen de Prima Media el valor era de \$345.085. Señala que PROTECCIÓN sí cumplió con el deber de informar a la demandante que el valor de la pensión iba a ser inferior al que tendría en el Régimen de Prima Media y se ignora que motivación tenía para afiliarse a Protección, lo que “lastimosamente, pues esto de interrogatorio de parte es muy difícil de concluir, puesto que la demandante no iba a declarar contra sí misma y sus intereses y admitirnos que Protección de pronto le advirtió en ese momento que había unas ventajas o ciertas

<sup>4</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/10Sentencia1Instancia. Min: 31:12- 33:09

<sup>5</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/10Sentencia1Instancia. Min: 33:21- 40:10

prerrogativas por lo que ella le llamaba más la atención estar en Protección que en el Régimen de Prima Media". **ii)** Dice que los promotores o los asesores de esa época ya no trabajan con PROTECCIÓN y es imposible traerlos al proceso. Pero insiste en que, si bien según la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el formulario no es suficiente, perfecto, obran dos proyecciones pensionales con la firma de la demandante que no fueron tachadas de falsas, acreditándose el deber de información un día antes de afiliarse. **iii)** Aduce que se cumplió con toda la carga y si bien se afirma en la sentencia que tenían el deber de desanimarla eso no se sabe, "solo lo sabe la demandante y el asesor de Protección, cuál fue entonces esa motivación para que ella no se desanimara después de mostrarle tal panorama".

## **5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>6</sup>, los apoderados de COLPENSIONES, la DEMANDANTE, decidieron intervenir de la siguiente manera:

### **5.1. ALEGATO DE COLPENSIONES**

El apoderado de **COLPENSIONES** de manera oportuna, señaló en síntesis<sup>7</sup>: **i)** Resalta que la señora Margarita María Fernández Tobón en la actualidad cuenta con 61 años de edad por lo que no cumple con el requisito consagrado en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993. **ii)** Señala que declarar la ineficacia del traslado de un afiliado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la reactivación de su afiliación, afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados. **iii)** Finalmente hace referencia a la sentencia T-489 de 2010 e indica que COLPENSIONES es un tercero ajeno y que si es decisión del despacho conceder las pretensiones se condene a PROTECCIÓN S.A. a entregar a COLPENSIONES el total de los valores cotizados y/o depositados en la cuenta del ahorro individual de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses, seguros previsionales y cualquier otro concepto a consideración del despacho.

### **5.2. ALEGATO DE LA DEMANDANTE**

La apoderada de la **DEMANDANTE** solicita que se CONFIRME la sentencia de primera instancia aludiendo a lo siguiente<sup>8</sup>: **i)** Indica que la seguridad social goza de especial protección ya que ésta se constituye como un derecho fundamental. Los art. 48 y 49 de la Constitución Política hacen referencia a lo anterior infiriendo que el Estado tiene la obligación de dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución, en sus componentes principales Salud, Pensión y Riesgos Laborales. **ii)** Denota que la información es

<sup>6</sup> Numeral 1 del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020. Carpeta 02SegundaInstancia/02AutoAdmiteCorreTraslado.

<sup>7</sup> Carpeta 02SegundaInstancia/04AlegatosColpensiones. Pág. 1-2

<sup>8</sup> Carpeta 02SegundaInstancia/06AlegatosDemandante. Pág. 1-4

considerada como un derecho de todo ciudadano a enterarse sobre aquello que desconoce, de manera clara, de tallada y transparente. Las Entidades Administradoras de Fondos de Pensiones, en las asesorías, describir las generalidades del sistema a sus posibles afiliados, y muy poco las ventajas y desventajas que conlleva pertenecer a un régimen pensional o a otro. **iii)** Insiste en que en el caso de la señora FERNÁNDEZ TOBON, está demostrado que las entidades no cumplieron con su deber de información y buen consejo al momento del traslado por lo que el traslado es ineficaz.

### 5.3. ALEGACIÓN DE PROTECCIÓN<sup>9</sup>

La apoderada reiterada la solicitud de revocar en su integridad la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos planteados en la contestación: **i)** Hace referencia concreta a documentos aportados con la contestación de la demanda (Solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Protección S.A de fecha 3 de septiembre de 2002; Carta de validación de la asesoría brindada a la demandante y Proyección y comparativo pensional realizado a la demandante el día 2 de septiembre de 2002) para señalar que Protección S.A cumplió con el deber de información hasta el punto de alertar a la demandante en la proyección pensional elaborada sobre la diferencia que podía existir en la mesada pensional que recibiría en cada régimen, siendo más favorable la que podría obtener en el régimen de prima media con prestación definida. Que a pesar de lo anterior, la demandante conocedora de las ventajas y sobre todo de las desventajas decidió trasladarse de régimen pensional a través de Protección S.A. En el interrogatorio de parte librado el día 19 de septiembre de 2022, la señora demandante admite y reconoce su firma en los documentos precitados, lo que ratifica esa decisión libre y voluntaria que precedió el traslado de régimen. **ii)** Invoca nuevamente la sentencia **SL 812 de 2022** de la que transcribió apartes, para señalar que este caso se adecúa a la misma situación del caso analizado en tal providencia porque desde el momento mismo del traslado de régimen se realizaron las proyecciones y comparativos pensionales que exige la Corte. Y expresa que la *ratio decidendi* de la precitada sentencia fue precisamente la realización de las proyecciones y comparativos que dan cuenta del cumplimiento del deber información, situación que se enmarca en el caso en particular.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de **COLPENSIONES**, lo que impone efectuar el análisis en el siguiente orden lógico: En primer lugar, la evolución normativa sobre los DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN MATERIA DE ASESORÍA E INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ para tomar la decisión de traslado de régimen inicial al RAIS. Así, se analizará en el CASO CONCRETO si debe CONFIRMARSE la DECISION de DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN de la DEMANDANTE, verificando lo relativo a las sumas que se ordenan devolver.

<sup>9</sup> CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – Archivo 08

## 6. LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN RELACIÓN CON EL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN O TRASLADO.

Esta Sala de Decisión ha tenido la oportunidad de expresar en varias oportunidades, que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el **I.S.S.** o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100, **de trasladarse al RAIS**, exigía que la persona tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, **los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse.**

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es exigible **desde su creación, y sin hacer distinción alguna**, de acuerdo a lo previsto en el **Decreto 663 de 1993**, aplicable a las AFP desde su origen, en el que se prescribió en el **numeral 1.º del artículo 97**, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan **la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen.***

Es así como, conforme a lo previsto en el **artículo 271** en concordancia con el **literal b) del artículo 13 de la Ley 100**, los trabajadores tienen la opción de **elegir «libre y voluntariamente»** aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y por ello, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de **afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social**, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

En relación con este aspecto, la Sala laboral de la Corte Suprema ha desarrollado un precedente pacífico: **SL12136-2014, SL17595-2017, SL19447-2017, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464- 2019, SL4360-2019, SL2611-2020 y SL4806-2020, SL 2208 -2021 – SL 3871-2021- SL 5686-2021- SL 5688-2021- SL 1055-2022** que se apuntala en las siguientes premisas básicas:

- Si bien en los últimos años se ha intensificado la regulación, con lo previsto en la **Ley 1328 de 2009 artículos 3, 5, 7 y 9; Ley 1480 de 2011 artículo 23, Parágrafo 1o. del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014**, y el **Decreto 2071 de 2015**, lo cierto es que la obligación de información clara y concreta previa al traslado se encuentra expresa en normas anteriores vigentes para la época en que se efectuó el traslado del demandante, **sin distinguir que tal deber sólo se refiera a los casos de las personas que eran beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100.**
- Para ello baste citar, **el artículo 13 en sus literales b) y k), el 106 y el 114 de la Ley 100**, en concordancia con lo previsto en el **artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y la modificación introducida con la Ley 795 de 2003**, normas en las que se establece que la selección régimen se debe tomar de manera libre, espontánea y sin presiones como requisitos para poder afirmar su eficacia; así como la obligación de las AFP de



suministrar a los usuarios la información necesaria para escoger las mejores opciones del mercado y tomar DECISIONES INFORMADAS.

- Siendo, así las cosas, antes del traslado el usuario debe conocer la lógica del RAIS y la esencia de su funcionamiento, sustentado en la capacidad efectiva del ahorro a lo largo de toda la vida para poder garantizar el derecho a una pensión. Y debe tener total claridad acerca de los aspectos relacionados no sólo con el monto y los requisitos de causación, sino la eventual opción de no acceder a esta prestación. Todos estos aspectos deben ser expresamente informados, para que el usuario pueda efectuar la comparación con las disposiciones que regulan el derecho pensional a los afiliados en el Régimen de Prima Media.
- En fin, significa entonces que la asesoría que debe brindar la Administradora de Pensiones en esa **ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA** a la formalización de la información, no sólo debe ser completa y comprensible para el afiliado, sino que trasciende al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” en los términos definidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente, deber que en los mismos términos fue acogido en el **artículo 3 del Decreto 2071 de 2015**, pues al mostrar con detalle las diferentes alternativas de la persona tras el análisis de su caso, mostrando los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, debe incluso ir más allá, para evitar que la persona tome una opción que claramente la perjudica.
- Y en relación con la carga probatoria, es claro que en los términos del **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, ello no se agota solo con traer los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo que no se satisface únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición. Y es así como las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.
- Finalmente, baste señalar cómo el criterio jurisprudencial orientador para este tipo de casos, fue plasmado en el **Código General del Proceso en el artículo 167**, norma en

la que se consagra la posibilidad de distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos que ayuden a esclarecer el objeto del litigio y que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, no hay duda que la parte que debe cumplir con esa carga es el Fondo Privado: **a)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, con la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le ha entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **b)** Conoce y tiene los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y que hizo posible que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

Por último, debe la Sala señalar que si bien, el precedente jurisprudencial se encuentra referido a casos de personas que se encontraban afiliadas a una administradora del Régimen de Prima Media y además, beneficiarias del régimen de transición, a quienes les afectó de manera considerable la decisión de traslado de régimen pensional; sin embargo, resulta evidente que la *Ratio Decidendi* de esas providencias resulta plenamente aplicable, a quienes eligieron el Régimen de Ahorro Individual por Primera Vez, porque lo relevante está, en que efectivamente se acredite dentro del proceso por la Administradora de Pensiones, que sí suministró la INFORMACION CLARA, COMPLETA, SUFICIENTE, en términos de transparencia y eficiencia.

## 7. EL CASO CONCRETO

Para efectuar el análisis se debe partir de las siguientes premisas no discutidas: i) **MARGARITA MARÍA FERNÁNDEZ TOBÓN** nació el **21 de marzo de 1961** por lo que en este momento cuenta con **61 años**<sup>10</sup>; ii) Se afilió inicialmente al **I.S.S.** desde el **10 de febrero de 1988** y cotizó **184,14** semanas hasta el **30 de septiembre de 2002**<sup>11</sup>; iii) Se trasladó del REGIMEN DE PRIMA MEDIA al de AHORRO INDIVIDUAL suscribiendo formulario de traslado. La solicitud de vinculación se hizo el **30 de septiembre de 2002** y en ese momento laboraba como docente en COLEGIO MONTESORI.<sup>12</sup>

Ahora bien, en el recurso de apelación y en las alegaciones en esta instancia se argumenta que en este caso se encontró probado el cumplimiento del deber de información para la época en que se presentó el traslado; señalando que se trata de un caso muy particular que se enmarca las circunstancias fácticas de la sentencia **SL 812 de 2022**, haciendo referencia a tres documentos aportados con la contestación:

- El primero, se refiere a un Formato en el que en la parte superior derecha se indica: No. AFILIACION 6090283. **Este documento no tiene fecha de elaboración**, y además se ignora

<sup>10</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/01.Demandadigitalizada. Pág. 80

<sup>11</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/07CorreoContestacionColpensiones. Pág. 46

<sup>12</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/05Contestaciondeproteccion17-06-2021. Pág. 37



en qué momento fue suscrito por la señora MARGARITA FERNÁNDEZ, quien reconoció la firma que en él aparece **más no su contenido**<sup>13</sup>.

- El segundo documento se titula ASESORÍA PENSIONAL PROTECCIÓN – COMPARATIVO DE LA PENSIÓN ENTRE LOS REGÍMENES DE AHORRO INDIVIDUAL Y PRIMA MEDIA. En el documento se indica como **Fecha de cálculo** el 2 de septiembre de 2009, y si bien en él reposa la firma de la demandante, se ignora la **fecha en que fue suscrito** y si efectivamente se dio a conocer a la señora FERNÁNDEZ TOBÓN con antelación a la suscripción del formulario de vinculación y en el contexto de una asesoría previa<sup>14</sup>.
- El tercer documento se titula ASESORÍA PENSIONAL PROTECCIÓN – COMPARATIVO DE LA PENSIÓN ENTRE LOS REGÍMENES DE AHORRO INDIVIDUAL Y PRIMA MEDIA, **no tiene fecha de elaboración ni firma alguna**<sup>15</sup>.

Ahora bien, en la diligencia de interrogatorio de parte MARGARITA en manera alguna confesó el haber recibido tales documentos e información antes del momento en que suscribió el formulario de traslado de régimen<sup>16</sup>; audiencia pública en la que expresó lo siguiente (**min 6:49 y siguientes**)

**“¿Qué grado de escolaridad tiene?** Especialista en salud mental **¿Cuál es su pregrado?** licenciada en problemas de aprendizaje escolar **¿Cuál es su ocupación?** Docente del colegio Montessori fundadora de párvulos.

**Pregunta el apoderado de PROTECCION.**

**Proyectaré un documento ¿señora Margarita manifiéstele al despacho si la firma contenida en este documento denominado SOLICITUD DE VINCULACIÓN AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN, si la firma contenida en esta casilla es la suya?** Si señora. **Como anexo a este formulario de vinculación está otro documento que se llama número de afiliación 609 0283. usted por favor nos dice si al final de la casilla ¿es su firma?** Si señora. **Aquí también seguidamente de este documento que le acabo de proyectar hay otros dos documentos denominados ASESORÍA PENSIONAL PROTECCIÓN COMPARATIVO DE LA PENSIÓN ENTRE LOS REGÍMENES DE AHORRO INDIVIDUAL Y PRIMA MEDIA ¿esta es su firma?** Si señora. **¿Usted recuerda el 02 de septiembre de 2022 cuando PROTECCIÓN le informó estos valores, cuál sería su pensión en el Régimen de Ahorro Individual y su pensión en el Régimen de Prima Media?** No **¿No recuerda?** No, eso no me lo hicieron a mí. **Pero ¿esta es su firma señora Margarita?** Si doctora, pero lo mío es, yo entré en el 2001 hice un remplazo de 6 meses y en el 2002 me llamaron a firmar contrato

**Pregunta el apoderado de COLPENSIONES:**

**¿Podría manifestarle al despacho cómo se dio el traslado al Régimen de Ahorro Individual?** No yo no tuve ninguna asesoría, yo firmé un contrato de trabajo y ya. **¿Puede manifestarle al despacho en qué año se dio la firma de ese contrato?** En el 2003 entré al colegio, en el 2002 entré al colegio, en el 2001 hice un remplazo, en el 2002 me llamaron para firmar contrato por término fijo. **¿Le puede manifestar al despacho cuál es motivo por el cual usted hoy realiza esta demanda?** Porque cuando cumplí los 57 años yo me presenté a Protección porque ya había cumplido y ya había, yo manejo niños muy pequeñitos y Protección me despidió con lo siguiente: tienes un bono pensional el cual tú debes reclamar hoy mismo o si no te pensionas con el mínimo y yo soy fundadora de este colegio y no, esto fue muy triste para mí.

Pues bien, efectuando la valoración de este acervo probatorio, esta corporación **no encuentra acreditado en manera alguna el cumplimiento del deber de información** por parte de la AFP PROTECCIÓN como pasa a exponerse:

<sup>13</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 05 – páginas 38

<sup>14</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 05 – páginas 39

<sup>15</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 05 – páginas 40

<sup>16</sup> Carpeta 01PrimeralInstancia/05Contestaciondeproteccion17-06-2021. Pág. 37

En primer lugar, destaca la Sala que las demandadas han afirmado a lo largo del proceso que la SELECCIÓN DE RÉGIMEN se tomó de **forma libre, espontánea y sin presiones** en los términos del formulario de afiliación suscrito por la actora, pero en criterio de la Sala, leyendas de este tipo no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, **acreditan un consentimiento, pero no informado**. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como "*la afiliación se hace libre y voluntaria*", "*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*" u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (**CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020**).

En la sentencia **SL 1452 – 2019** la Sala de Casación Laboral a partir de lo previsto en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 1º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, señaló lo siguiente:

De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación *libre y voluntaria*, mediante la entrega de la **información suficiente y transparente** que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. **No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro.** La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público.

(...)

Ahora bien, la información necesaria a la que alude el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hace referencia a la **descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales**, de modo que el afiliado pueda **conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones**. Por lo tanto, implica un **parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes**, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Por su parte, la transparencia es una norma de diálogo que le impone a la administradora, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en **un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios**. En otros términos, la transparencia impone la obligación de dar a conocer **toda la verdad objetiva** de los regímenes, **evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro**.

(...)

Y no podía ser de otra manera, pues las instituciones financieras cuentan con una estructura corporativa especializada, experta en la materia y respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios. Estos últimos, no solo se enfrentan a un asunto complejo, hiperregulado, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y macroeconómicas, sino que también se enfrentan a **barreras derivadas de sus condiciones económicas, sociales, educativas y culturales que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones**. Por consiguiente, la **administradora profesional y el afiliado inexperto** se encuentran en un plano desigual, que la **legislación intenta reequilibrar mediante la exigencia de un deber de información y probatorio a cargo de la primera**.

**Negrilla intencional**

En criterio de esta Sala de Decisión no se demuestra que **MARGARITA MARÍA FERNÁNDEZ TOBÓN** antes de suscribir el formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN hubiese recibido la información suficiente y transparente que le permitiera elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado aquella que mejor se ajustara a sus intereses; ni que se le hubiese brindado una descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, haciéndole un parangón entre las características, **ventajas y desventajas objetivas** de cada uno de los regímenes vigentes.

Según lo acreditado en el plenario, resulta evidente que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para **MARGARITA MARÍA FERNÁNDEZ**, ésta tenía menos de **35 años** de edad y **de 15 años de servicio**. Pero de acuerdo con el análisis efectuado en el **acápito sexto** de esta providencia y con el precedente jurisprudencial sobre la materia, los promotores de la AFP ante la suscripción del formulario de traslado, **independiente de si la demandante era beneficiaria o no del régimen de transición**, tenía no solo el **DEBER** sino la **OBLIGACIÓN** de brindarle una **asesoría personalizada**, analizando **las circunstancias particulares, y mostrando aspectos concretos de su situación pensional**.

Como para la época en que suscribió el formulario no había entrado en vigencia la Ley 797, se le debió explicar que si permanecía en el I.S.S., el derecho a la pensión de vejez se causaría al arribar a los 55 años de edad y acreditando 1000 semanas cotizadas, para pensionarse con una mesada cuyo valor podría ser con una tasa del 85 % en caso de cotizar 1400 semanas, sobre un IBL integrado en los términos del artículo 21 de la Ley 100.

Y se le debió indicar además, que si se trasladaba para el RAIS, las condiciones pensionales serían las siguientes: **i)** Se podría pensionar antes de los 57 años; sin embargo tal circunstancia estaba sujeta a una condición y es que tuviera el capital suficiente para poder optar al menos por una pensión mínima (artículo 64 Ley 100); **ii)** Como la demandante tenía cotizaciones en el REGIMEN DE PRIMA MEDIA, debía saber que las cotizaciones que había efectuado en el I.S.S. se verían representadas en un bono pensional tipo A que sólo **se redime en el caso de las MUJERES a los 60 años**, de manera que, si se daban las condiciones para pensionarse anticipadamente, habría que negociar el bono en el mercado financiero, disminuyendo su valor, lo que tendría efecto en el valor de la mesada en la medida en que disminuiría el valor del capital para financiar la prestación. **iii)** Frente al valor de la pensión en el RAIS, se debió explicar que ésta depende del capital consignado en la cuenta individual y según la modalidad pensional elegida (artículos 79 a 82 de la Ley 100), y que el valor que se abonaría a la cuenta individual no sería equivalente al 100% de la cotización, porque una parte se destinaría a pagar la prima mensual de la compañía de seguros, a gastos de administración y al fondo de solidaridad del RAIS. **iv)** Y en relación con la ausencia de beneficiarios en materia de pensión de sobrevivientes y la posibilidad de que los dineros

de la cuenta de ahorro individual se destinen a la masa hereditaria, se debió precisar que **ello no ocurre si la muerte se presenta siendo pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia.** v) También se debía indicar, que en caso de que no completara el capital suficiente para obtener una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones actualizado con el IPC), entonces **debía seguir cotizando hasta obtener 1.150 semanas y cumplir 57 años**, para poder acceder a la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, mostrando que esos dos requisitos eran superiores a los consagrados en el I.S.S. vi) Y que la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, es un beneficio que no se presenta en todos los casos porque está sujeto a unas condiciones y explicarle cuáles (artículo 84 de la Ley 100, vigente para la época), para que tuviese claro que, si no cumplía con ello, no obtendría pensión de vejez y por ello, la entidad le devolvería los saldos que estuvieran en su cuenta individual, con el efecto que eso genera en relación con la afiliación en salud.

Es por ello que, contrario a lo que se afirma por la recurrente, en criterio de esta corporación la prueba del proceso no otorga el convencimiento para concluir que se encuentra probado el cumplimiento del deber de información para la época en que se presentó la afiliación de **MARGARITA MARÍA**, sin que se observe que hubiese efectuado **confesión en contra** al absolver el interrogatorio de parte. Por el contrario, si bien reconoció como suya la firma de los documentos aportados con la contestación que reposan en las **páginas 37 y 38**, negó que el segundo de ellos se lo hubiesen hecho a ella y fue enfática al afirmar que **no tuvo ninguna asesoría antes del traslado de régimen**; siendo claro que finalmente no se demuestra el conocimiento efectivo de su contenido antes del 30 de septiembre de 2002.

En este contexto, en criterio de esta corporación la situación fáctica de este proceso difiere de la descrita en la providencia invocada por la recurrente - **SL 4680-2020**- referida a un proceso en el que se demostró: **i)** Que la actora suscribió un documento que contiene la “proyección de la mesada pensional” en el que se indicó el valor en el RPM y en el RAIS y en el que aparece una anotación manuscrita de la demandante y su firma en la que expresa que “soy conocedora de que el cambio no me favorece, pero mi decisión es afiliarme a Protección”. **ii)** Los testigos de la AFP corroboraron que la asesoría que proporcionó la AFP fue personalizada. **iii)** En el interrogatorio de parte la demandante confesó haber recibido asesoría previa enfatizando en los detalles de la información recibida y las razones por las que, a pesar de conocer las desventajas respecto al valor de la mesada, decidió formalizar el traslado de régimen. Así, a partir de las afirmaciones de la actora, la Alta Corporación concluyó:

Las anteriores respuestas son constitutivas de confesión, en la medida en que lo admitido por la absolvente, comporta la aceptación de hechos que perjudican la situación procesal de la promotora del juicio. En efecto, expresó que comprendía y era consciente de las implicaciones que tenía migrar del RPM al RAIS, al punto de precisar que conocía que si bien, no le era benéfico para efectos pensionales, sí en caso de fallecer, porque dejaría un sustento económico a sus descendientes.

De igual forma, el relato permite entrever que la demandante tenía claro el funcionamiento del RAIS, por cuanto sabía la importancia del bono pensional y que en el evento de morir, este podía ser sucedido a sus beneficiarios. De igual forma que

conforme a lo aportado a su cuenta de ahorro individual podía acceder con mayor prontitud a una pensión, solución que no se abría paso en caso de permanecer en Colpensiones”.

En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, **PROTECCIÓN** no probó y **MARGARITA MARÍA** no confesó que antes de suscribir el formulario de traslado hubiese sido ilustrada sobre la posibilidad en términos de valor, de recibir una pensión inferior en el RAI y aun así decidir afiliarse; ni que hubiese brindado la información detallada y objetiva sobre el funcionamiento de cada régimen; y **que con el panorama completo la actora hubiese decidido afiliarse al RAI aun conociendo sus desventajas.**

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a la Sala a CONCLUIR, conforme las normas, jurisprudencia y acervo probatorio recaudado, que resulta procedente **CONFIRMAR** la decisión de **DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN.**

Debe destacarse que la ADMINISTRADORA DEL RAIS y COLPENSIONES en la contestación propusieron la EXCEPCION de PRESCRIPCION, pero en el contexto que se ha venido analizando, debe señalarse que estamos en presencia de la ineficacia del traslado: Y una de las características esenciales de la inexistencia, es que es insubsanable por la prescripción - No adquiere vida por el transcurso del tiempo, por lo tanto, en cualquier tiempo puede ser alegada su inexistencia. En la sentencia **SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**, la Sala Laboral de la Corte explicó con claridad sobre la inoperancia del medio exceptivo, no solo por su conexidad con un derecho fundamental e irrenunciable, sino porque el sustento fáctico del proceso da lugar a consolidar el status de pensionado, y, en consecuencia, propiciar la posibilidad del disfrute de un derecho económico no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo.

Finalmente, **en relación con las sumas de dinero que se deben devolver**, debe señalarse lo siguiente: **i)** En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias **SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019**, así como en la **SL 2877 y SL 4811 de 2020** ha explicado que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al *statu quo ante*). **ii)** Y como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el **artículo 1746 del Código Civil** y este por analogía es aplicable a la ineficacia, según esta disposición, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. **iii)** O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al ***statu quo ante*** no sea una salida razonable o plausible, la juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen. **iv)** Y en la medida que la



ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone **negarle efecto al traslado**, tal situación solo es posible bajo **la ficción de que el mismo nunca ocurrió**. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que **nunca se cambió al sistema privado de pensiones**, y si estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que **nunca se trasladó al sistema público administrado por COLPENSIONES**. v) Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales a que haya lugar; así como **los gastos de administración, las comisiones (CSJ SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020 y SL373-2021)**, los porcentajes destinados a conformar el **Fondo de Garantía de Pensión Mínima** y los valores utilizados en **seguros previsionales** con cargo a sus propias utilidades (**CSJ SJ SL2209-2021 y SL2207- 2021**). vi) Así, reconoce esta corporación que si bien existió una administración por parte de las AFP, además del pago de seguros, producto de la declaratoria de ineficacia todos los recursos deben trasladarse a aquella administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, teniendo presente que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional, se cubren las prestaciones causadas. Por ello **PROTECCIÓN S.A.** efectuara la devolución en relación con los períodos en que estuvo afiliada. vii) Se destaca que ninguna de las devoluciones acá ordenadas se ve afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, excepción propuesta por las accionadas, la que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no opera en estos litigios, dado el carácter irrenunciable del derecho pensional, que se extiende a la acción para reclamar su conformación con todos los aspectos conexos que le son inherentes (**CSJ SL1688-2019; CSJ SL12715-2014; CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 jul. 1996. SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**) viii) Finalmente, para garantizar la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA esta Sala de Decisión ordenaba que el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente definido por la Corte Constitucional en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 DE 2010 y SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM. Pero reexaminando el asunto, y a partir del precedente vertido por la Sala de Casación Laboral en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021, SL 3709-2021 y SL 1055-22**, considera que lo procedente para tal fin es ordenar **la devolución de tales sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**. Al momento de cumplirse los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Así, en este aspecto se **MODIFICARÁ** la providencia que se revisa.



Con relación a las devoluciones que aquí se ordenan, y toda vez que al momento de proferirse la presente decisión la DEMANDANTE alcanzó los **61** años, **es completamente posible que el bono pensional ya se hubiere redimido y su valor se encuentre depositado en la cuenta de ahorro individual de la señora FERNÁNDEZ TOBÓN**. Al tratarse de una eventualidad no acreditada en el proceso, se adicionará la sentencia, porque el valor del bono pensional corresponde al emisor, es decir al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en consecuencia, PORVENIR deberá adelantar los trámites dirigidos a la correspondiente anulación del bono y devolverá a esta entidad las sumas que por este concepto hubiere recibido, debidamente indexadas. Decisión que se encuentra ajustada a lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1748 de 1995, concordado con el Artículo 57 del referido Decreto, modificado por el Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, inciso 2º hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

## 8. COSTAS

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia sólo se CONDENÓ en COSTAS a PROTECCIÓN S.A. **ii)** Y respecto a las **costas en esta instancia** al no prosperar el recurso interpuesto por PROTECCIÓN S.A., serán a su cargo y a favor del demandante, en los términos del artículo 365 numeral 1 del Código General del Proceso. Agencias en derecho 1 s.m.l.m.v. para el 2023

## 9. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

**PRIMERO:** Se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, pero con las siguientes MODIFICACIONES:

- Se MODIFICA el numeral **TERCERO** porque dentro de los **30 días siguientes** a la notificación de esta providencia, **PROTECCIÓN S.A.** debe **devolver** a **COLPENSIONES** la totalidad de la cuenta de ahorro individual incluyendo los rendimientos financieros, **así como los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, incluyendo así: CUOTAS DE ADMINISTRACION, PRIMAS PARA SEGURO PREVISIONAL y las SUMAS DESCONTADAS PARA GARANTIA DE PENSION MINIMA** debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

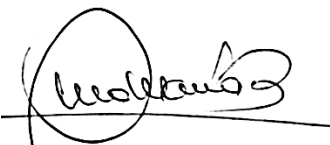
En caso de haberse redimido el bono pensional de la demandante, se **ORDENA** a **PROTECCIÓN S.A** adelantar los trámites para la correspondiente anulación del bono y así devolver las sumas que por este concepto hubiere recibido al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, debidamente indexadas, conforme lo definido en la parte motiva de esta providencia.

- El numeral **CUARTO** se revoca parcialmente en lo referente a la autorización a COLPENSIONES de realizar un cálculo de equivalencia de los dineros los dineros recibidos desde el régimen de Ahorro Individual, en razón de las modificaciones efectuadas al numeral TERCERO y de conformidad con lo explicado en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Se condena en COSTAS en esta instancia a PROTECCIÓN S.A. Las agencias en derecho por una suma equivalente a 1 S.M.L.M.V.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 016 2020 00244 01

SENTENCIA del //10/02/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR: [https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EhQ2BwisyFxFrsiFigQH054BTu9K2MRxrwblbtIAhqpKQ?e=nFQtst](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhQ2BwisyFxFrsiFigQH054BTu9K2MRxrwblbtIAhqpKQ?e=nFQtst)